

La política y lo político en los movimientos sociales en Argentina

Héctor Palomino (coordinador), Gustavo Rajher, Leticia Pogliaghi, Inés Lascano. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires¹.

Presentación

Los movimientos sociales configurados por organizaciones de desocupados, trabajadores de empresas recuperadas y asambleas barriales, constituyen respuestas novedosas a la crisis del modelo neoliberal en Argentina. Esos movimientos espontáneos no sólo reflejan sino que también impulsan la politización de la sociedad civil, formulando proyectos que enfocan el cambio radical de las relaciones sociales. Por un lado apuntan a modificar las reglas básicas del sistema económico y social, sustituyéndolas por otras que plantean un acceso universal a los medios de subsistencia y un acceso colectivo a los medios de producción. Por otro lado amplían las fronteras de la política instalando nuevas prácticas sociales de deliberación, a través de una capacidad de movilización e influencia que excede considerablemente su dimensión efectiva, en términos del número de sus miembros. Estos nuevos movimientos sociales intervienen en la construcción de la nueva agenda política de la Argentina post neoliberal, aportan nuevas soluciones para resolver la pobreza y el desempleo, colocan nuevos valores y modelos culturales y son, finalmente, quienes se

¹ Este trabajo se realizó en el marco de las investigaciones de la cátedra de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Agradecemos los aportes de Florencia Alippe, Ivanna Bleyntatt, María I. Fernández A., Carla Giacomuzzi y Silvia Garro.

animan a pensar un futuro diferente para un país que insiste en volver la mirada hacia su pasado esplendor.

1. Introducción

Los movimientos sociales urbanos que irrumpieron en la escena pública en los últimos ocho años en Argentina constituyen respuestas novedosas a la crisis provocada por el modelo político, económico y social instalado en los '90. De esos movimientos, algunos parecen haber concluido recientemente un ciclo que los llevó casi hasta su extinción, como los clubes de trueque. Otros movimientos en cambio, como los trabajadores de empresas recuperadas, las organizaciones de desocupados y las asambleas barriales, a los que dedicamos este estudio, continúan activos en la sociedad y en la política.

Dentro de cada uno de los movimientos sociales, aún cuando sus protagonistas se conciben como integrantes de un espacio colectivo común, se incorporan a tendencias y corrientes diversas. Algunas de esas tendencias se orientan decididamente a intervenir en el sistema político, y conciben su intervención en lo social en términos puramente instrumentales. Otras tendencias en cambio, orientan sus demandas al Estado y al sistema político como medios para la obtención de recursos que les permitan sostener la transformación de las relaciones sociales en el largo plazo. Todas ellas, más allá de sus diferencias, conciben sus acciones cotidianas como esencialmente políticas.

Más allá de las diferentes orientaciones de los movimientos, todos ellos buscan articularse entre sí, a través de redes y organizaciones informales, mediante la construcción de ámbitos comunes, o realizando acciones solidarias que sostienen sus lazos de reciprocidad. Estos movimientos convierten a la sociedad en un

espacio político, borran las fronteras tradicionales entre política y sociedad, y responden de hecho al interrogante sobre la posibilidad de hacer política “desde” la sociedad.

En qué consiste hacer política “desde” la sociedad? Para una mirada “externa”, la escisión entre la sociedad y el sistema político, y el privilegio de lo social sobre lo político, sostenidas por los movimientos sociales, supondrían un riesgo para la democracia, en la medida que tienden a sustituir la política por la moral, sustantivan y reducen el bien común, rechazan las formas prevalecientes de representación. Para una mirada “interna”, en cambio, el campo de acción de los movimientos es un vasto espacio de experimentación social, de esfuerzos originales de definir y producir colectivamente bienes y servicios adecuados a las necesidades sociales, de autodeterminación de la propia existencia económica y social.

Aquí adoptamos este segundo enfoque, de modo de comprender los movimientos como prácticas deliberativas de actores sociales constitutivas de un espacio público, que profundizan la democracia reconduciéndola a sus raíces sociales y trascendiendo su definición restringida a un régimen político.

A través de entrevistas originales a activistas de los diferentes movimientos, que continúan estudios precedentes (Palomino, 2002; Palomino y otros, 2003; Palomino y Pastrana, 2003; Di Marco y otros, 2003), presentamos aquí un panorama de la dinámica interna de los diferentes movimientos, y de sus relaciones con la economía, la sociedad y la política.

2. El surgimiento de los nuevos movimientos sociales.

El surgimiento de los nuevos movimientos sociales coincide con la primera crisis del modelo económico instalado durante la pasada década en Argentina. Ese modelo se fundó sobre un tipo de cambio fijo de la moneda, la apertura a las importaciones, la privatización de las grandes empresas de servicios públicos y una serie de reformas de mercado inspiradas en el denominado “Consenso de Washington”. El sostén principal de esta política económica fue la abundante provisión de crédito externo para cubrir los déficits del sector público, originado primero en los costos financieros y fiscales de las reformas, y luego para sostener el pago de intereses sobre la propia deuda contraída. Se trató de un modelo fuertemente inestable por su exposición al sistema financiero internacional y a sus movimientos cíclicos de corto plazo, que generaron sucesivos ajustes económicos internos en cada coyuntura crítica: el efecto “tequila” que siguió a la crisis mexicana de 1994, la crisis asiática de 1998, la devaluación del real en Brasil en 1999.

Las reformas del mercado de trabajo y del sistema previsional, y la desindustrialización provocada por la competencia de las importaciones sobre la producción local, generaron un considerable desempleo que alcanzó niveles inéditos en la experiencia histórica. Además del desempleo se verificó una considerable precarización laboral, derivada de la desarticulación del salario de los institutos de protección y seguridad social. El desempleo y la precarización incidieron notoriamente en el crecimiento de la pobreza, que alcanzó también niveles inéditos para la experiencia histórica.

La mayoría de las reformas de mercado y la privatización de los servicios públicos y de la producción gasífera y petrolera, se realizaron en la primera mitad de la década, en un contexto de estabilidad macroeconómica proporcionado por la convertibilidad 1 a 1 de la moneda local con el dólar, implementada en 1991. Si bien en los primeros años se observó una recuperación de la economía, en 1994 y 1995 se registró la primera gran crisis del modelo. Esta crisis se manifestó como una elevación abrupta de la tasa de desocupación abierta que se triplicó en menos de dos años, al crecer de 6% de la PEA en octubre de 1993, a 18% en mayo de 1995. A partir de 1995 la desocupación se mantuvo por encima de los dos dígitos y la pobreza tendió a crecer sistemáticamente hasta el año en curso, 2003.

La emergencia de la pobreza y el desempleo masivos, los aspectos salientes de la cuestión social contemporánea en Argentina, sirve para marcar el origen de los nuevos movimientos sociales como respuestas a la aplicación del modelo neoliberal. Aunque estos movimientos se conciben a sí mismos en continuidad con otros preexistentes, en particular con los movimientos por los derechos humanos, el destino de sus reclamos y el sentido de las construcciones sociales que emprenden se afirman centralmente en contraposición al “modelo”.

El primero de esos movimientos, el nucleado en torno a los clubes de trueque, fue definido por sus promotores como una red de economía alternativa a la economía formal, y surgió precisamente en 1995 en coincidencia con el momento de mayor desocupación. Los valores de cooperación y de intercambio recíproco y solidario que sostenían las redes de trueque, inscribían una verdadera contracultura frente al individualismo y la competencia valorizados por el neoliberalismo prevaleciente en los ‘90. El crecimiento casi exponencial de las

redes de trueque hasta 2002, paralelo al incremento de la pobreza, llegó a incorporar varios millones de personas en este tipo de intercambios.

En 1997 se registraron las primeras puebladas bajo la forma de cortes de ruta realizadas por “piquetes” de vecinos, en zonas como Cutral-Co en el Sur, y Gral. Mosconi y Tartagal en el Norte, afectadas por el desmantelamiento de las instalaciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales a raíz de su privatización. Estas formas de lucha se difundieron más tarde a través de organizaciones de desocupados que se consolidaron regionalmente al principio y luego fueron coordinándose a través de todo el territorio nacional, incorporando a los más afectados por el modelo neoliberal. Cabe anotar aquí un aspecto significativo: el inicio de los “piquetes” se vincula menos con las privatizaciones que con su secuela posterior, ya que las protestas se iniciaron algunos años más tarde que aquellas.

El desarrollo de las organizaciones de desocupados es paralelo a la política estatal de compensar la desocupación mediante subsidios transitorios, a cambio de una contraprestación laboral en emprendimientos municipales, enmarcados en un programa denominado “Plan Trabajar”. Si bien los subsidios estaban destinados a beneficiarios individuales, las organizaciones de desocupados se ubicaron como mediadores para su canalización, y encabezaron las reivindicaciones y reclamos colectivos para su continuidad y ampliación.

Entre 1996 y 1998 pueden fecharse las primeras experiencias de empresas recuperadas por sus trabajadores que luego se integrarían en un movimiento más amplio. Se trata de empresas abandonadas por sus propietarios o en proceso de quiebra, cuyo cierre pone en riesgo de desempleo a la totalidad del personal de

esos establecimientos. La ocupación de empresas fue haciéndose cada vez más frecuente, sobre todo a partir de 2001 cuando los trabajadores de varias de estas empresas comienzan a organizarse en un movimiento que difunde la práctica de la “recuperación”. A partir de la crisis institucional del 19/20 de diciembre de 2001, las experiencias de recuperación de empresas se multiplicaron, a favor de la profunda deslegitimación del modelo neoliberal. Y es probable que esta deslegitimación sea lo que habilita el cuestionamiento o, al menos, la restricción al derecho de propiedad concebido como principal o prioritario con respecto a cualquier otro.

Finalmente, a partir de la crisis institucional de diciembre de 2001, surgieron las asambleas barriales, nucleamientos organizados espontáneamente por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país, para reclamar y demandar el cambio del sistema político. Esta demanda radicalizada, expresada en la consigna “que se vayan todos”, fue sostenida en base a movilizaciones callejeras pero sobre todo en reuniones periódicas barriales en las que discutía una agenda extensa y variada de temas y problemas. A través de esas discusiones se promovían los principios de una democracia no delegativa y la acción directa, la autonomía con respecto a toda forma organizativa externa, la horizontalidad en la toma de decisiones. Las asambleas fueron volcándose paulatinamente hacia actividades vinculadas con la organización de servicios sociales y culturales para el barrio de inserción, desde compras comunitarias hasta la instalación de merenderos, la generación de emprendimientos productivos, talleres de capacitación, ciclos de cine, grupos de estudio, etc.

Estos movimientos fueron articulándose paulatinamente entre sí, más allá de las diferencias de origen social de sus miembros, en redes constituidas a partir de

actividades comunes, o a través de lazos partidarios transversales. Las asambleas barriales fueron las más renuentes a facilitar su control externo por partidos políticos o sindicatos, mientras que las organizaciones de desocupados fueron escindiéndose paulatinamente en grupos controlados por partidos políticos por un lado y grupos autónomos por el otro. En las empresas recuperadas, la conformación de colectivos de trabajo previos a la acción externa de otras organizaciones o partidos, facilitó al mismo tiempo su autonomía y una vinculación relativamente sólida con ellos en función de las necesidades y recursos demandados por los trabajadores.

3. La dinámica interna de los movimientos sociales

3.1. Piquetes

En el marco de una desocupación y pobreza crecientes durante la segunda mitad de los '90, un sector de desocupados comenzó a organizarse colectivamente para enfrentar la crisis. Surgieron de esa manera, movimientos de desocupados nucleados en torno a la protesta social y basados en la solidaridad y en la búsqueda de soluciones a las necesidades individuales y colectivas. Primero se organizaron en puebladas, en Neuquén (Cutral-Có) y en Salta (Gral. Mosconi), seis años atrás, como respuesta al cierre de plantas de trabajo. Allí surgió también una modalidad de lucha que los caracteriza, los cortes de ruta que toman el nombre de piquetes, de ahí la denominación de Movimiento Piquetero². Posteriormente, estos movimientos se organizaron en barrios carenciados en la

² Los piqueteros relacionan esta metodología con la utilizada por los viejos inmigrantes anarquistas que la importaron al movimiento obrero incipiente y las realizaban en las puertas de las fábricas.

periferia de los grandes centros urbanos y algunos de ellos alcanzaron una organización de carácter nacional.

La fuerte atracción ejercida por los piquetes se relaciona con su mayor “visibilidad” con respecto a los otros movimientos sociales, considerablemente mayor, sin duda, que la de las asambleas barriales. En esta mayor visibilidad de los movimientos de desocupados inciden, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos “piqueteros”, su capacidad de movilización “agregada” -la de todas las organizaciones que agrupan a los desocupados- abarca actualmente cerca de 100.000 personas en todo el país. Esto no es poco, sin duda, aunque la cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados. Aunque posiblemente más que sus dimensiones, sea la acción misma de los “piquetes” la que da cuenta de su visibilidad: los cortes de ruta alcanzan un fuerte e inmediato efecto mediático. Se trata de acciones “maximalistas” que contrastan, sin embargo, con los fines en principio “minimalistas” que animan las movilizaciones, que se circunscriben en su mayoría a la obtención de subsidios por desempleo y bolsas de alimentos. Aunque algunos grupos “piqueteros” se limitan a sostener estos limitados reclamos, varios de ellos han emprendido hace tiempo actividades de alcances más vastos en el seno de las comunidades en las que están implantados territorialmente: merenderos y comedores, instalaciones educativas y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que vuelcan los recursos obtenidos en las movilizaciones. En relación con estos emprendimientos, la actividad de los “piquetes” aparece como la punta del *iceberg* de una construcción social mucho más compleja.

En la trayectoria de estas organizaciones se detectan algunos rasgos comunes. Todas ellas iniciaron las actividades de organización de desocupados mediante la obtención de subsidios, convirtiéndose en canalizadoras de las demandas dentro de un sistema similar al de la articulación clientelar de los partidos políticos tradicionales. Actualmente todas ellas realizan trabajos comunitarios, orientados a suplir las necesidades de los barrios donde están implantados, para lo cual demandan al Estado planes sociales, bolsones de comida y otros recursos, a partir de sus luchas y reclamos. Finalmente, todas las organizaciones conciben su acción como esencialmente “política”, pero el sentido que asignan a su acción política tiende a diferenciarlos netamente, por lo que si bien agregan bases sociales con rasgos relativamente homogéneos en términos de pobreza y desocupación, sus orientaciones son heterogéneas.

Bajo estos términos, entonces, podríamos reconocer dos situaciones diferenciables en los que agruparíamos a buena parte de los nucleamientos piqueteros: la primera de ellas, signada por su orientación hacia la política en tanto esfera autónoma institucional (el sistema político) y organizada en partidos políticos; la otra, prescindente del sistema político formal y más orientada hacia lo social, como ámbito de reproducción de los lazos comunitarios, sociales, afectivos, culturales y económicos. Lo político aunque más explícita y concientemente manifiesto en el primer extremo, se halla presente a lo largo de todo el arco consignado.

Piquetes organizados por partidos

Entre los movimientos de desocupados que adscriben a una organización partidaria, las elecciones nacionales y provinciales de 2003 permitieron observar

proyectos diferentes. Éstos distinguen a los que optan por intervenir en el sistema político formal participando de la competencia electoral con representantes pertenecientes al mismo movimiento piquetero, de aquellos que participan indirectamente, a través de los representantes de los partidos políticos con los que se vinculan.

En el primer subgrupo, cuyos dirigentes optan por participar directamente como candidatos electorales, se encuentra la Federación Tierra y Vivienda, con fuerte anclaje en el distrito de La Matanza (en el Gran Buenos Aires), dirigida por Luis D'Elía. Este referente presentó su candidatura para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones. Además, este movimiento junto con su principal aliado, la Corriente Clasista y Combativa presenta otros tipos de inserción institucionalizada. Por una parte, la FTV es la representante del movimiento piquetero en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), central sindical de tercer grado, integrando su mesa directiva. Por otra parte, la FTV y la CCC participaron de la mesa de diálogo en el que convergieron representantes de diversos sectores sociales convocada durante 2002 por el entonces Presidente de transición, Eduardo Duhalde.

Un segundo subgrupo dentro de esta orientación, lo componen las organizaciones piqueteras que tienen estrechos lazos con partidos políticos. Por lo general, estos movimientos operan como un brazo, una extensión de aquellos partidos hacia lo territorial. La particularidad de este subgrupo, radicaría en que no son los referentes de los movimientos quienes se postulan para cargos electivos, sino que apoyan las candidaturas de los partidos respectivos, por lo general agrupaciones minoritarias de izquierda. Entre estas agrupaciones piqueteras encontramos al Polo Obrero (vinculado al Partido Obrero), el Movimiento Territorial de

Liberación (Partido Comunista), la Federación de Trabajadores Combativos (que nuclea diversa orientaciones trotskistas como MAS, FOS, PRS). Estas agrupaciones integran el Bloque Piquetero Nacional, en el que también se incluye el MST (Movimiento Sin Trabajo) vinculado al Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Estos nucleamientos tienden a reproducir en su organización las estructuras partidarias: una secuencia de agregación de instancias participativas, desde los comedores u otro ámbito organizativo de base territorial, enviando representantes hacia instancias locales, municipales, distritales, provinciales o regionales y finalmente nacionales. Si bien el aspecto social está presente a través de la instalación de comedores o emprendimientos productivos, el énfasis está puesto en la posibilidad de lograr un impacto político en nivel del sistema político formal y a escala nacional a través de los medios. Los dirigentes de los movimientos piqueteros participan de las mesas directivas de los partidos. La “gran política” nacional e internacional, motiva la discusión y el posicionamiento de los referentes de cada agrupación.

Dentro de la corriente que articula las organizaciones de desocupados con partidos políticos, cabría diferenciar un tercer subgrupo, con características muy similares a las descriptas, que no participaron en las elecciones recientes. Puede ubicarse aquí, en primer término, al movimiento Barrios de Pie, vinculado al Partido Patria Libre. La organización de este movimiento se asemeja al de los grupos descriptos arriba, en cuanto replica las estructuras funcionales partidarias en el movimiento, y los posicionamientos con respecto a las líneas políticas seguidas por el gobierno de turno en la esfera doméstica y en el contexto internacional. En tanto Patria Libre ha optado por mantenerse al margen de este

proceso electoral, Barrios de Pie se ha hecho eco de lo resuelto por la dirección del partido, llamando a la abstención o el voto en blanco.

En segundo término podría incluirse en este subgrupo al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que tiene como figura excluyente a su impulsor Raúl Castells, quien proyecta una imagen y un accionar asimilable al de un líder populista y fuertemente personalista. No obstante no presentar una candidatura en el plano electoral, tendió algunos puentes más o menos visibles con algunos líderes políticos de primera línea.

En síntesis, a pesar del trabajo social que efectivamente llevan a cabo estos grupos, lo social se subsume en el proyecto político que no deja de aflorar en ningún momento. Por lo general, la apelación al “derrumbe del sistema”, la “rebelión popular”, el “Argentinazo”, la “revolución”, etc., muestran a las claras la ponderación real que subyace a los proyectos sociales. Barrios de Pie, en tanto corriente de inclinación nacionalista de izquierda, matiza esta tendencia, aunque tampoco vislumbra una salida en torno de la economía social, a la que nos referiremos más adelante.

Piquetes orientados a “lo social”

Estos grupos prescinden del sistema político y orientan su acción hacia lo social. Entre ellos encontramos al Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento de Unidad Popular, los diferentes Movimientos de Trabajadores Desocupados, la coordinadora Anibal Verón, la UTD de General Mosconi, entre otros.

El Movimiento Teresa Rodríguez da cuenta de un debate interno, que no pudo evitar rupturas y desmembramientos al decidir sumar a las consignas originales

de “Trabajo y Dignidad”, la de “Cambio social”. En su manifiesto llamado “Libro Celeste” puede leerse “... *que el pueblo comience a regir su destino como lo hacen los miembros de nuestro Movimiento. Y jamás el pueblo hará esto sólo porque le dirijamos excelentes discursos o inundemos las calles con toneladas de volantes y revistas. (...) desde que nuestro Movimiento existe ha centrado sus luchas en la obtención de empleos y alimentos...*”. A pesar de las posturas políticas contrarias al capitalismo y favorecedoras de una organización, primero del movimiento y luego de la sociedad, en Cabildos (asimilables a los soviets), el horizonte de largo plazo de esta lucha redunda en una estrategia que ha priorizado aquellos aspectos sociales.

Por su parte el Movimiento de Unidad Popuar (MUP) con una mirada mucho más concreta de la problemática que los nuclea, plantea el cambio social como un objetivo de largo plazo. “*Hay un grupo que cree que la revolución se hace mañana. Nosotros planteamos nuestra estrategia sin tiempo, estamos convencidos que la cosa va para largo*” explica un miembro de ese movimiento. Los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) actúan de manera autónoma frente a cualquier fuerza política externa o de escala regional. Eventualmente y de manera poco orgánica, coordinan sus acciones de cortes de rutas y accesos y reclamos de Planes sociales en la Coordinadora Aníbal Verón. Estos movimientos se muestran volcados muy marcadamente al desarrollo de emprendimientos comunitarios: comedores, merenderos, educación popular y emprendimientos productivos de diversa naturaleza concentran la acción de sus miembros, varios de ellos beneficiarios de los Planes Sociales nacionales y provinciales.

Quizás el caso paradigmático en este grupo lo constituya el MTD de La Matanza que, además de promover los micro emprendimientos productivos, ha petitionado ante las autoridades nacionales el respaldo institucional para hacer funcionar una escuela en un espacio recuperado donde funcionara antes un establecimiento educativo privado. Más aun, los miembros de este movimiento rechazan la práctica de demandar subsidios y planes sociales, como una postura crítica hacia las políticas meramente asistencialistas. Es en este último grupo, donde tienen lugar los debates más ricos y las experiencias más variadas en torno a la Economía social y solidaria, denominación muy extendida por estos tiempos aunque demandante de definiciones y precisiones con respecto a su contenido.

En suma, en tanto las expectativas de cambio social se dibujan en un horizonte de plazos variados en cada agrupación, se perfilan estrategias diferenciadas que enfatizan en el componente más político en algunos casos, y más social en otros. Pero, como ya mencionáramos, el proceso de politización de las relaciones sociales es omnipresente en todo el movimiento piquetero. Las prácticas democratizantes, la toma de decisión abierta, consensuada, colectiva e igualitaria, el debate en torno de las formas de producir y el destino del excedente, son temas que están presentes en todas las experiencias de raigambre más social. También el llamamiento a la participación y el involucramiento en los temas del colectivo son planteados en las organizaciones del primer grupo, restando aquí la tarea de conocer en qué medida la interacción entre los líderes más formados y las bases, consigue plasmar esa aspiración declamada.

3.2. Los trabajadores de empresas recuperadas³

El impacto social del movimiento que protagonizan actualmente los trabajadores de “empresas recuperadas” se relaciona menos con su magnitud (involucra aproximadamente ciento cincuenta pequeñas y medianas empresas), que con sus dimensiones simbólicas. Este fenómeno involucra la redefinición de las relaciones entre capital y trabajo y pone en discusión la vigencia irrestricta del derecho de propiedad, proporcionando a los trabajadores una nueva herramienta de presión y negociación frente a los empresarios.

Si bien las experiencias se multiplicaron y su presencia pública se fortaleció a partir de la crisis de 2001, sus orígenes son previos y se sitúan en la segunda mitad de los '90. Algunos trabajadores que afrontaban la posibilidad de cierre de sus empresas en diversas ramas de actividad: frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etc. protagonizaron estas experiencias. Varias de esas empresas se encontraban en procesos de quiebra, o en convocatoria de acreedores, o directamente habían sido abandonadas por sus propietarios, incluso sin haber procedido al cierre formal de los establecimientos. En general, la crisis en cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, el pago en vales, la carencia de aportes previsionales, etc. En un contexto de creciente desempleo, los trabajadores se habían visto obligados a aceptar estas condiciones de precariedad contractual para preservar sus puestos, pese a lo cual debieron afrontar la situación límite del cierre de las empresas. Los trabajadores, situados en la posición de damnificados y acreedores de estas empresas en crisis, se

³ Palomino, Héctor y otros. *El movimiento de trabajadores de empresas recuperadas*, en Revista Sociedad n° 20/21 Ed. Manantial, 2003.

organizaron de manera relativamente autónoma para tomar a su cargo la producción. Al mismo tiempo buscaron definir un nuevo régimen jurídico de las empresas que, aún transitoriamente, les proporcionara una protección legal.

En estas experiencias, por lo general, los trabajadores adoptaron la figura de cooperativa, aunque en algunos casos mantuvieron la forma legal de la sociedad comercial establecida anteriormente, y en otros casos llegaron a acuerdos con la patronal para incorporarse como accionistas de las empresas. La adopción de la figura de cooperativa respondía sobre todo a la necesidad de constituir un sujeto jurídicamente responsable de las transacciones económicas y financieras de las empresas.

Estos trabajadores se mantienen en una articulación recíproca y con otros movimientos sociales como el de los “piquetes” y las “asambleas” barriales, y cuentan con el apoyo de partidos políticos, parlamentarios y funcionarios estatales, e incluso de sindicatos. Los abogados que llevan adelante el proceso legal son partícipes activos del movimiento, y su actuación trasciende con frecuencia esa asistencia y se vuelca a las cuestiones de gestión, producción y administración.

A pesar de las diferencias internas, que suelen ser de tipo político, todas estas empresas presentan afinidades, principalmente en cuanto a su primer objetivo: recuperar y sostener la fuente de trabajo.

Los diversos orígenes y experiencias explican las razones por las cuales el movimiento de trabajadores de empresas recuperadas no está unificado, y la competencia entre diversas corrientes, actores y organizaciones por su liderazgo.

Podemos distinguir cuatro corrientes con propuestas de gestión, organización, métodos de lucha, aliados y opositores, orientaciones y fines políticos y sociales distintos.

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER)

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es una de las corrientes que reúne a mayor cantidad de empresas con estas características en todo el país. No tiene aún una forma organizativa definida, aunque los dirigentes del MNER cuentan entre sus proyectos la constitución de una asociación civil para institucionalizarse como organización y poder actuar legalmente. Si bien aglutina a empresas que adoptan distintas figuras jurídicas, en su mayoría se trata de cooperativas de trabajo que luchan porque el Estado expropie la fábrica y se las ceda para su explotación.

El objetivo principal de esta corriente es la recuperación de puestos de trabajo y sus reivindicaciones se relacionan con demandas de políticas públicas dirigidas en este sentido. También promueven la participación de la comunidad en la fábrica mediante la puesta en funcionamiento de centros culturales, talleres de oficio, salas de atención primaria de la salud, etc.

Varios de los integrantes de este movimiento han militado activamente en el Partido Justicialista, y muchos ven estas experiencias como la base para un cambio en la política económica del país. Así han intentado, en algunos casos con éxito, insertarse en el sistema político por la vía electoral con el fin de ganar espacios institucionales para consolidar estos procesos de lucha.

Sin embargo, la distancia entre los dirigentes y los trabajadores es grande. El fin de los trabajadores que integran este movimiento es “recuperar” su fuente de trabajo, esto representa una necesidad urgente para ellos. Involucrados en el proceso de recuperación de la fábrica, se encuentran con más trabajadores en situaciones similares y con los dirigentes de esta corriente que explican la situación económica nacional basándose en una crítica profunda al sistema económico capitalista. Es así como han organizado ya varias actividades, coordinadas con otras instituciones, en contra de la incorporación de Argentina al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El futuro de estas experiencias aparece asociado a la evolución de la economía, por lo que las políticas económicas que se implementen tendrán un fuerte impacto sobre aquellas. Aunque consideran a la economía social como generadora de empleo, no les parece suficiente frente a la magnitud de la desocupación actual, y creen que sólo con el desarrollo y la generalización de estas experiencias podrá alcanzarse una salida, parcial, del desempleo. Además, están planteando una serie de reformas al marco legal existente con respecto a la quiebra de empresas, y la constitución de un fondo fiduciario para facilitar el desarrollo de las experiencias existentes y fomentar nuevas.

El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores

El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores es la otra corriente que aglutina a un gran número de fábricas recuperadas. Nació en el año 2003 como un desprendimiento del MNER. Si bien existen algunas diferencias en el plano ideológico, tanto los trabajadores como los dirigentes de ambos movimientos piensan que la fractura se originó más en enfrentamientos políticos

y personales entre los dirigentes de ambos. Este Movimiento se ha conformado como una Organización No Gubernamental como medio de diferenciación de las otras corrientes, y su presidente es Luis Alberto Caro, abogado de las empresas que integran el movimiento, y el resto de los cargos directivos son cubiertos por representantes de las cooperativas que pertenecen al mismo. Las decisiones se toman en asamblea, a donde asisten dos o tres trabajadores por fábrica, elegidos preferentemente por consenso o, en su defecto, por voto.

La reivindicación básica del movimiento es la recuperación de las fábricas y su conformación en cooperativas, sin involucrarse en cuestiones más amplias. Para ello, están trabajando en torno a tres puntos: la reforma de la Ley de Quiebras, la creación del Instituto de Desarrollo en la fábrica, y del Banco de las Fábricas, que funciona como un fondo solidario para la ayuda de las fábricas en recuperación. No están de acuerdo con la utilización de la fábrica como espacio para el desarrollo de actividades culturales, ya que, según el Dr. Caro, “si estas actividades se desarrollan los trabajadores pierden la concentración y el objetivo, que es trabajar”.

El movimiento se define autónomo con respecto a los partidos políticos, pero tanto su presidente como algunos trabajadores se han presentado como candidatos partidarios en las elecciones de este año. Han realizado alianzas con ciertos grupos piqueteros (Corriente Clasista y Combativa y algunos sectores del Movimiento de Trabajadores Desocupados). Creen que el Estado, además de la sanción de la Ley de Quiebras, de una Ley de Expropiación y una Ley para Fábricas Recuperadas - que contemple la situación previsional de los trabajadores -, debería aportar fondos y establecer una política de recuperación productiva.

La Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo de Empresas Reconvertidas

La Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo de Empresas Reconvertidas (FENCOOTER) funciona estrechamente vinculada con el Instituto Nacional de Economía social, el organismo gubernamental que regula la actividad de las cooperativas. Como la Federación sostiene los principios del cooperativismo, aglutina exclusivamente a empresas recuperadas que hayan adoptado la figura jurídica de cooperativa de trabajo.

Su principal actividad consiste en asesorar sobre cooperativismo y el marco legal a los trabajadores de empresas quebradas, en concurso de acreedores o abandonadas que quieran, de manera espontánea, conformarse en una cooperativa y hacerse cargo de la producción. Por otro lado, al estar en contacto con el gobierno, cuentan con una gran accesibilidad al resto de los organismos públicos que pueden asesorar a estos trabajadores en algunos temas. Sus métodos de lucha y mecanismos de presión resultan acotados porque su vínculo con el Estado obliga a la Federación a manejarse dentro de los límites establecidos en un marco legal que no contempla, aún, a las nuevas formas de expresión social que tomaron renovado impulso a partir del colapso institucional de diciembre de 2001.

Al igual que en otros movimientos muchos de sus dirigentes tienen antecedentes de militancia en el Partido Justicialista, pero además su posición está condicionada por su relación con el gobierno, lo que dificulta las posibilidades de articulación con otros movimientos sociales más críticos de las decisiones

oficiales. Aunque la Federación viene elaborando varios proyectos de reformas legislativas para favorecer la consolidación de las experiencias existentes de recuperación de empresas, no se muestran interesados en aumentar su capacidad de intervención social.

La Propuesta de la Estatización bajo Control Obrero

Por último, podemos vislumbrar un conjunto de fábricas, de las cuales sobresalen Brukman y Zanón, ya sea por la originalidad de sus reclamos, o por el alto grado de conflictividad con que se desenvuelven estas experiencias. Aunque este movimiento no cuenta con una forma jurídica ni con una organización determinada, sus miembros realizan reuniones y congresos junto a movimientos piqueteros (Bloque Piquetero Nacional), asambleas populares (Interbarrial de Capital y Gran Buenos Aires), algunos sindicatos, agrupaciones estudiantiles y otras fábricas recuperadas. Los caracteriza el rechazo, en principio⁴, a la conformación de cooperativas, debido a que persisten en su definición básica como trabajadores -es decir, no quieren ser empresarios ni socios de cooperativas- y desean recibir un salario por parte del Estado que les garantice el acceso a la Seguridad Social.

El objetivo principal de esta fracción del movimiento es no permitir la destrucción de puestos de trabajo y creación de nuevos. Proclaman también la defensa del trabajo asalariado garantizado por el Estado en empresas gestionadas por los trabajadores, y la conformación de un Fondo de Huelga Nacional que se destine al apoyo de los trabajadores que demanden recursos para llevar adelante

⁴ Los trabajadores de Brukman, finalmente, constituyeron la Cooperativa de Trabajo 18 de diciembre y están en tratativas con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para recuperar sus puestos de trabajo.

la recuperación. La relación con el Estado es sumamente conflictiva debido no sólo al radicalismo de las propuestas, sino que éstas resultan poco conciliables con las políticas del gobierno, por lo que sufren continuas amenazas de desalojo⁵, denuncias, etc.

Varios trabajadores de estas empresas se han presentado como candidatos de partidos de izquierda a cargos parlamentarios en las elecciones del presente año, lo cual indica además el rol activo de esos partidos en la lucha por la recuperación de empresas. El fin último de estos trabajadores, movilizados por las consignas de los partidos políticos que los acompañan, es la lucha contra el capitalismo. Para ello buscan la recuperación y expropiación de las fábricas, el reparto de las horas de trabajo y el desconocimiento de la deuda externa⁶.

Sólo en pocos casos se observa la participación directa del Estado en las empresas recuperadas. Uno de ellos es la reciente estatización de la Clínica Medrano, en Capital Federal, posibilitada por la existencia previa de hospitales municipales que permite la integración del servicio de salud en el área del gobierno local. Otra es la participación de una Intendencia provincial en la fábrica de maquinaria agrícola Zanello, interesada en promover el desarrollo local.

⁵ De hecho Brukman se encuentra desalojada actualmente (principios de diciembre de 2003), y los trabajadores están acampano en una plaza próxima a la fábrica. Aunque obtuvieron un respaldo parlamentario importante que garantiza su gestión, todavía no lograron reingresar en el establecimiento que sigue ocupado por la Policía Federal.

⁶ Prensa Obrera, 30 de abril de 2003, Año XXI, N° 798.

3.3. Las asambleas barriales

El quiebre político–institucional y económico de fines de 2001 puso en cuestión el sistema de partidos y las formas delegativas de la democracia que prevalecieron desde la salida de la dictadura en 1983. Por eso uno de los ejes centrales de acción de las asambleas barriales se vincula con la crítica al sistema político y la elaboración de propuestas alternativas de profundización democrática. Sin embargo, los objetivos de las asambleas trascienden el plano político-institucional y apuntan a intervenir también en el plano económico y social, a través del desarrollo de una nueva economía social y solidaria, y a elaborar respuestas a las crisis de los sistemas educativo, de salud, etc. De allí la novedad que aportan las asambleas al estudio de los movimientos sociales, ya que lejos de circunscribir su acción a focos “temáticos” restringidos, se orientan por fines amplios (a veces difusos para el observador externo), tanto como los fines de “cambiar la vida” enunciados por muchos asambleístas.

En las elecciones de 2003, se presentaron como candidatos algunas figuras que habían participado en las asambleas barriales, como el periodista Miguel Bonasso, que alcanzó la diputación nacional por Capital Federal. Sin embargo, las asambleas como tales no apoyaron candidaturas partidarias, y más bien, varias de ellas promovieron el “abstencionismo activo” en esas elecciones. Pero no habría que evaluar el impacto político de las asambleas en términos de su participación o rechazo a las elecciones –de hecho la concurrencia electoral en 2003 fue más importante que en las elecciones previas de octubre de 2001- sino a través de su capacidad de intervención para diseñar la agenda política actual. El desplazamiento del Presidente de la Corte Suprema –que renunció luego de un

serio enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, y con el fin de evitar el juicio político-, la alineación de los jueces con una práctica jurídica autónoma y responsable luego de una década de subordinación al poder político, la reorientación de las políticas públicas en el sentido demandado desde hace dos décadas por los organismos de derechos humanos, constituyen hechos y orientaciones que trascienden el mera renovación parcial de los elencos políticos. De allí que el impacto político de las asambleas trascienda considerablemente su escasa presencia pública actual, sobre todo porque han logrado colocar renovados valores en el espacio público.

Características de las asambleas barriales.

Una característica central de las asambleas es su apropiación del espacio urbano, a través de reuniones en las esquinas, en las plazas, al pie de monumentos históricos de los barrios. Esta apropiación genera literalmente un espacio público como foro para los debates, discusiones, reclamos y propuestas, que contrasta con las tendencias prevalecientes durante una década de privatización de los espacios públicos, de individualismo y consumismo. Las asambleas eligieron como lugares de reunión el corazón comercial o recreativo de cada barrio, lo que facilitaba el acceso de los vecinos, la visibilidad para los transeúntes o usuarios de medios de transporte. Varias asambleas variaron su localización inicial por causas diversas.

Masivas en sus inicios (algunas de ellas llegaron a convocar a varios cientos de personas), fueron disminuyendo su número y por diferenciación interna y ruptura se formaron nuevas asambleas que fueron localizándose en el “interior” de los barrios, con el fin de facilitar el encuentro con los vecinos en espacios que

facilitaran la sociabilidad. La necesidad de contar con un lugar propio y ampliar el espectro de sus actividades llevó a algunas asambleas a la “toma” de locales públicos y privados, y comenzaron a funcionar en locales “cerrados”, no sin fuertes debates internos acerca de la conveniencia o inconveniencia de continuar o abandonar las esquinas y plazas abiertas.

El promedio de concurrencia a las asambleas fue variando. Masivas en el inicio, la concurrencia era numerosa en casi todas las asambleas en el periodo comprendido entre los meses de enero y abril de 2002, aproximadamente. Luego, en la mayoría fue mermando la cantidad de participantes hasta llegar a una cantidad que fluctúa aproximadamente, en promedio, entre 20 y 40 personas cada una. Varias son las razones atribuidas por los asambleístas para esta disminución que afectó la visibilidad pública a las asambleas. En general son razones de orden político y se relacionan con la dinámica interna de las asambleas: las tensiones y conflictos suscitados por las presiones de las agrupaciones políticas, determinaron que vecinos sin pertenencia política desertaran. Lo mismo ocurrió, a la inversa, con los militantes partidarios que fueron desertando de las asambleas al no encontrar el eco esperado para sus propuestas y consignas.

La visibilidad del movimiento de asambleas barriales se atenuó considerablemente luego de su surgimiento en la ola de movilizaciones que siguió al 19/20 de diciembre de 2001. Esa menor visibilidad se relaciona sin duda con la disminución del número de sus integrantes en comparación con las que registraran en los primeros meses de 2002, pero más que la atenuación de su densidad numérica parece haber incidido en esto la propia estructura del movimiento, carente de un “centro” de coordinación, y la escala “minimalista” de sus actividades cotidianas.

La carencia de un “centro” coordinador se vincula con los propios objetivos de un movimiento que cuestiona las formas delegativas de representación y promueve la autonomía radical de las asambleas ancladas territorialmente. En realidad este es un punto clave para el que las asambleas no han provisto aún una solución definitiva: la soberanía de cada asamblea contradice los mecanismos tradicionales (delegativos o jerárquicos) de coordinación, y esta contradicción tiende a resolverse en la práctica mediante mecanismos de coordinación informal a través de redes de asambleístas, reconocimiento recíproco a través de actividades puntuales comunes, instancias de coordinación zonal e “inter-zonal”, comisiones transversales “temáticas”, etc.

En los inicios del movimiento se constituyó una asamblea interbarrial en el Parque Centenario en la Ciudad de Buenos Aires, que a lo largo de los primeros cuatro meses –enero-abril de 2002- intentó funcionar como un centro de coordinación del movimiento. Esta fue también, posiblemente, la época de mayor visibilidad pública de las asambleas, ya que la reunión semanal de varios cientos y miles de personas tenía un impacto mediático considerable. Pero las asambleas fueron abandonando ese espacio poco apto para el ejercicio de las formas de democracia participativa y directa, y por su rechazo al control y las presiones ejercidas por las agrupaciones políticas externas al movimiento. Si bien las asambleas no excluyen a los militantes de partidos políticos—de hecho muchos de los miembros de las asambleas son, o fueron, militantes partidarios, sindicales, etc.—, promueven la autonomía e independencia de las asambleas con respecto a todo control externo.

Las asambleas fueron organizando espacios de coordinación más regionalizados, o nucleados por ejes comunes de acción e interés, espacios de debate político,

diversas comisiones temáticas como Intersalud, Intertomas, Foros de Salud; asambleas zonales en diversas zonas de la ciudad. Desde fines de 2002 y durante 2003 se vienen desarrollando espacios de coordinación diferentes, que buscan la construcción política a través de afinidades y visiones comunes, apoyadas sobre la experiencia de las asambleas de cada barrio. Más allá de la participación en marchas, movilizaciones, “escraches”, etc., la actividad cotidiana de las asambleas se desarrolla en reuniones semanales periódicas en los barrios de Capital Federal y algunos partidos del Gran Buenos Aires, en los que se debaten temas diversos. Por otro lado, muchas asambleas instalaron comedores y centros de ayuda escolar, promueven actividades culturales diversas, elaboran proyectos y sostienen emprendimientos para generar alternativas de empleo a desocupados y personas con bajos ingresos, etc. Aunque varias de estas actividades son encaradas por las asambleas en instalaciones ocupadas o “tomadas”, carecen obviamente del efecto mediático de los piquetes y de las empresas recuperadas. Contrasta con ello sin embargo la escala “maximalista” de los debates de las asambleas, en los que se discute acerca de las más variadas cuestiones, la renovación incesante de proyectos, la progresiva integración en redes locales e internacionales en las que se buscan caminos alternativos al neoliberalismo.

En un principio las asambleas tenían una dinámica rígida de funcionamiento, con coordinación, lista de oradores, confección de la agenda de temas a tratar, votación de mociones, comenzando con el análisis y discusión de los puntos votados en la Interbarrial de Parque Centenario. Es posible que la concurrencia masiva inicial condicionara este mecanismo de organización interna, pero se trata de una modalidad impuesta por agrupaciones políticas experimentadas en la aplicación de esta lógica, que reproducía el sistema tradicional imperante en otros ámbitos y organizaciones (universidades, partidos, sindicatos, etc.). Esta

modalidad fue trasladada a las asambleas, lo cual generaba un clima de tensión interna que se intensificaba aún más con las disputas entre distintas tendencias de las agrupaciones políticas, que buscaban monopolizar los temas de las asambleas e imponer sus formas de organización y propuestas de acción.

La rotación de las coordinaciones, derivada del criterio de evitar la conformación de cuerpos directivos y del principio más general de rechazo a las formas delegativas de representación, buscaba evitar la burocratización del funcionamiento y neutralizar los intentos de control por grupos organizados externamente. Pese a las rigideces de funcionamiento, en la dinámica interna de las reuniones se buscó preservar la horizontalidad en la participación y en la toma de decisiones, se ensayaron nuevas formas de coordinación, y se evitó el nombramiento de delegados permanentes que asumieran la representación de la asamblea en instancias externas de articulación. Los elegidos para tareas específicas de articulación, generalmente lo eran a través de “mandatos revocables” puntuales: más que de “delegados” se trataba de “voceros” que comunicaban las decisiones de las asambleas “hacia afuera”, que no estaban investidos de representación alguna fuera del mandato específico. En suma, las asambleas buscaron preservar el principio de democracia directa (no delegativo) en la toma de decisiones.

Con el correr del tiempo pudieron apreciarse cambios significativos en estas modalidades de funcionamiento. No se trató de cambios “naturales”, sino de una reflexión permanente sobre sus propios mecanismos de funcionamiento, considerados y debatidos ampliamente. Se fue pasando de la votación a la elaboración de mecanismos de consenso, aunque este proceso no es idéntico en todas las asambleas, según las circunstancias, los temas tratados, el número y el

perfil político de los asambleístas. Las razones de este pasaje de la votación al consenso son diversas. En principio se trata del reconocimiento recíproco y la profundización de lazos personales entre los asambleístas, lo cual en ocasiones fue facilitado por la disminución del número de integrantes. Esto permitió el diseño de agendas “autogeneradas” con menor variedad de temas, enfocados sobre los intereses del mayor número de asambleístas, y menos atados a solicitudes “externas” provenientes de agrupaciones políticas. Las rupturas internas tuvieron muchas veces el sentido de neutralizar a esas agrupaciones, cuyos integrantes en ocasiones se sintieron “expulsados” de las asambleas.

Algunos militantes de partidos políticos fueron atrapados por el proceso de “socialización” y aprendizaje de las asambleas y terminaron por amoldarse a su dinámica (sea por voluntad propia, por consignas de su partido, o por la tolerancia de los partidos -al parecer creciente en algunos- a la “doble” militancia asamblearia y partidaria). La distensión del clima interno de las asambleas facilitó el cambio en la dinámica de funcionamiento y en la sustitución de las votaciones por el consenso para la toma de decisiones.

En algunas asambleas la búsqueda de nuevos mecanismos que evitaran la esclerosis de la dinámica asamblearia fue sumamente explícita, llevando a la conformación de instancias y grupos de “reflexión” destinados a discutir en profundidad los temas más conflictivos, lo cual redundó, obviamente, en la selección y priorización de las agendas de debate. En estas instancias “se preparaban” por así decir, los temas a discutir en las asambleas, con la premisa que la agenda fuera consensuada y no se establecieran votaciones en estas reuniones “para-asamblearias”. Obviamente esto implicó un engrosamiento

considerable de la agenda personal de cada asambleísta, que debió ir sumando reuniones semanales a la de la asamblea *stricto sensu*.

De todos modos varias asambleas siguen funcionando en base a comisiones y, a su vez, forman comisiones interzonales con otras asambleas, para temas específicos, con mayor grado de formalidad o informalidad, según las características de cada una. Estas comisiones abarcan distintos temas pero en términos generales se refieren a prensa, salud, medio ambiente, jóvenes, cultura, problemas barriales, desocupados, presupuesto participativo, enlace, coordinación inter-asambleas, finanzas.

Las tensiones internas entre “vecinos” y “militantes de partidos políticos”, condujeron a diversas rupturas: en algunas, los vecinos se retiraron de la asamblea, creando una nueva, a pocos metros de la anterior, en otras las tensiones culminaron con la “expulsión” de los militantes de algunas agrupaciones políticas, u obligándolos a abandonar todos los espacios de responsabilidad en las tareas de la asamblea. Finalmente, otras asambleas sostuvieron el debate en el plano discursivo y lograron superar la crítica de los militantes de partidos de izquierda; éstos o bien se adaptaron o bien se retiraron de manera más o menos estentórea, fijando posiciones por escrito.

Actividades de las asambleas

El debate de ideas, la elaboración de proyectos de acción y la evaluación de las acciones realizadas constituye la piedra de toque del movimiento de las asambleas. Algunos contenidos fueron constantes y generalizados, como los vinculados con el funcionamiento interno de las asambleas y con la coyuntura

política del país. Otros contenidos, en cambio, presentan diferencias territoriales de interés, ya que se concentra en ejes temáticos surgidos de la realidad de cada barrio.

Las agendas de debate de cada asamblea son considerablemente extensas. Una breve enumeración de los temas tratados, reiterados en varias asambleas permite clasificar los debates en torno a algunos ejes significativos:

- a) Debates ideológicos generales: análisis de las contradicciones económicas y políticas, por la aplicación del modelo neoliberal en el país; corrupción de la clase política; democracia directa; reestatización de las empresas privatizadas; luchas obreras; políticas represivas, análisis de la política internacional; presupuesto participativo.
- b) Debates sobre el nuevo significado territorial de las luchas (por ejemplo, sobre la “soberanía barrial” como principio general para la planificación y realización de acciones diversas de acción en el barrio.
- c) Debates sobre las acciones y formas de organización de la asamblea: sistemas de delegación; formas de toma de decisiones, por votación o consenso; relaciones con otras asambleas; formulación de proyectos; toma de locales; relaciones con otros movimientos; formas de demandar y protestar: marchas, cacerolazos, apagones, cortes de calles, escraches, exigitorios (en lugar de petitorios) a las empresas de servicios.

Cada asamblea fue produciendo un espacio para los debates y sus contenidos se fueron modificando según la evolución del movimiento asambleario y los acontecimientos político-sociales que se iban sucediendo.

Proyectos y acciones

Las acciones realizadas por las distintas asambleas son muy diversas, y se pueden agrupar en:

Asistencia a las urgencias de vecinos y trabajadores en la zona de influencia de las distintas asambleas: merenderos y comedores (especialmente las asambleas que tomaron locales); realización de ollas populares con cartoneros, personas indigentes del barrio; apoyo escolar; compras comunitarias; empadronamiento de desocupados, entrega de bolsones de comida; reclamos ante el aumento de tarifas y auxilio para reconectar a los usuarios afectados por cortes; negociación de los cortes de servicios públicos por falta de pago; paralización o bloqueo de desalojos

Salud: apoyos a los hospitales de la zona; distribución de medicamentos genéricos; campañas de vacunación para cartoneros; campaña para la despenalización del aborto.

Culturales y Recreativas: creación de bibliotecas; charlas y cine-debates, festivales, teatro; edición de revistas y publicaciones propias.

Proyectos Autogestivos: ferias artesanales; producción y comercialización de alimentos; redes comerciales solidarias de productos de empresas recuperadas

Acciones de protesta: movilizaciones en apoyo a los trabajadores de empresas recuperadas; apagones y cacerolazos contra el el aumento de tarifas de servicios públicos; acompañamiento a los organismos de Derechos Humanos en sus marchas y escraches a represores, a políticos y medios de comunicación y a empresas que despiden a obreros y empleados.; marchas y actos para fechas determinadas (24 de marzo, 1º de mayo, 19 y 20 de diciembre) o en contra de políticas represivas.

Cada una de estas acciones supone la organización en redes cada vez más amplias y complejas, reinventando redes existentes y creando otras nuevas, en una práctica social que recupera, en la mayoría de los casos, el sentido de las redes sociales como estructuras abiertas, capaces de expandirse sin límites. La contribución de Internet permite sumar a la vinculación personal, cara a cara, la inmediatez de la información, frecuentemente asociada con una lectura crítica de la realidad, alejada de las noticias que difunden las corporaciones multimedios. El papel de internet y del correo electrónico para difundir convocatorias ha sido de suma importancia cada vez que ha sido necesaria la respuesta rápida frente a situaciones críticas (desalojos, represión, etc)

Más allá de las diferencias suscitadas entre los assembleístas, las *tomas* posibilitaron un aumento de la sinergia en las asambleas, agregándose a la compleja trama de redes y coordinaciones preexistentes. En general, los vecinos ven con buenos ojos estas ocupaciones y colaboran con comida para los comedores, con muebles y artefactos para el equipamiento. Al mismo tiempo las tomas suscitaron nuevos conflictos en las relaciones entre assembleístas, volcados a resolver múltiples problemas cotidianos (la seguridad del lugar, su limpieza, desratización, arreglo de la infraestructura, etc.), con el consiguiente aumento de

tiempo dedicado a la participación por parte de los más activos, y la consiguiente distancia generada con los más renuentes que “sólo pasan por la asamblea una vez por semana para votar si está bien o está mal lo que hacemos nosotros todos los días”.

Otro aspecto clave de las asambleas es su capacidad de integración social, de género, de orientaciones sexuales, de generaciones, de clases, de culturas políticas. Como herederas de los denominados “nuevos movimientos sociales”⁷ (feminista, ecologista, de derechos humanos, etc.), las asambleas articulan situacionalmente las luchas de cada uno de los anteriores en un espacio común.

En tanto sujetos colectivos, amplían las fronteras de la ciudadanía como capacidad de interpelar al estado, y como derecho a tener derechos, y también como derecho a incluirse en lo político a partir de las propias diferencias. En cada asamblea, la construcción de la identidad colectiva surge de las formas en que se negocian los sentidos referidos a las diversas tensiones que las atraviesan: lo político y lo político-partidario, los temas generales y la acción barrial, las consignas y la reflexión, la militancia actual y las pasadas, los ensayos y los logros, la decisión de realizar y sostener la toma de un local o no, el tipo de proyectos que generan, la relación con piqueteros, con el estado local, las redes que construyen, la solidaridad hacia adentro y hacia fuera de la asamblea. En este proceso, existen intereses y demandas que van ocupando el centro de la escena en las asambleas, y que revelan un aumento en su capacidad de agregar intereses en la escena pública. El proceso y el modo de analizar, discutir y tomar decisiones acerca de estos puntos va construyendo un *nosotros*, que actúa como

⁷ Jelin, Elizabeth (1985)

factor de reconocimiento mutuo, simultáneamente con el reconocimiento social: la capacidad de convocatoria para movilizaciones, para los escraches, la presencia solidaria en defensa de algún derecho vulnerado.

4. Lo político y la política en los movimientos sociales.

“... A lo que estamos asistiendo es a una politización mucho más radical que nada que hayamos conocido en el pasado,... no en términos de... un espacio público unificado, sino en términos de una proliferación de espacios políticos radicalmente nuevos y diferentes.” (Laclau – Mouffe. 1987).

Si durante la mayor parte del siglo XX, y pese a la recurrente inestabilidad introducida por los golpes militares, los partidos políticos lograron subsumir a la política y confundirse con ella, el escenario actual muestra desajustes, fisuras y brechas entre las interlocuciones que otrora supieran articular. Esto plantea, cada vez con mayor claridad, el colapso de un orden antes que sus posibles nuevas formas. Los partidos políticos comenzaron a asumir un rol de “gerenciadores” de la política desde el retorno de la democracia en 1983 y profundizaron tal función a partir de los '90, bajo la forma de una democracia “delegativa” (término propuesto por Guillermo O’Donnel), procurándose reaseguros diversos para su funcionamiento, como la garantía constitucional del monopolio de los partidos para el acceso a los cargos electivos, o un financiamiento estatal equivalente a la cantidad de votos alcanzados en las elecciones.

Esta imagen de la esfera política como un mercado oligopólico semi-cerrado, concesionado por quienes debían asegurar su apertura e inclusividad ciudadana, refuerza la idea de corporativización de la política, que diera lugar a la apelación

de la “clase política” tan arraigada en la población. Los debates en torno a la crisis de representación suscitan la idea de la desconexión entre la voluntad de los mandantes y el accionar de los mandatarios. Ahora bien, esa crisis de representación bien podría aludir, no sólo a un recambio de hombres que supieran administrar con más eficiencia y eficacia (conceptos dominantes en los noventa) la cosa pública dentro de los límites ya trazados entre la esfera propiamente política y la económica, la social, etc. La desconexión de voluntades también se vincula a la casi inexistente discusión en torno de esos límites, asumidos como naturales. La politización del espacio de la política así como del resto de los ámbitos, su interrelación, y las nuevas interacciones posibles entre los sujetos y éstos, imprimieron un sello de desazón y pérdida de referencias sobre la política como ámbito para el cambio.

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina vino a replantear la cuestión de los límites del espacio institucionalizado de la política, abriendo paso a lo político instituyente y a una redefinición de la política como “fidelidad a lo Nuevo” [Badiou: 2000]. Es aquí donde incorporamos a los nuevos movimientos sociales, como uno de los actores que desafía lo instituido. Es posible, entonces, afirmar con De Ipola que “... si el movimiento es irritado por el sistema político, también “irrita” al sistema político”. La noción de movimiento como ruptura de la repetición colectiva social se asocia con la idea de igualdad como aglutinante y meta de la acción, y en su carácter político en tanto cuestionador del orden instituido y potencialmente instituyente.

El hilo conductor que atraviesa a los movimientos sociales es su carácter político, que enfoca sus luchas hacia un cambio en las relaciones de poder / sociales y con el Estado. Este objetivo, que bien puede entenderse como la construcción de

Poder, implica la configuración de un nuevo sujeto político conciente de su condición. Dentro de esta matriz común a los movimientos, se observan diferentes orientaciones específicas y nucleamientos según los ritmos temporales que cada uno de ellos se impone para realizar sus aspiraciones de cambio, toma o construcción de Poder, lo que incide directamente sobre sus líneas de acción y estrategias.

Además de un objetivo último, político, los movimientos se fijan otros objetivos, sociales, que en algunos casos se asumen sólo como medios para la consecución del primero. El “refugio” en lo social, no implica la renuncia a esa práctica política que venimos señalando como constitutiva de los movimientos; antes bien esa esfera más vinculada a lo reproductivo, al ámbito de las relaciones comunitarias, a las necesidades materiales, al mundo de lo inmediato, de lo urgente, se atraviesa con varias formas nodales de lo político, como las prácticas democráticas, la horizontalización de las relaciones sociales, el reconocimiento de los otros como pares, la necesidad de generar consensos para la toma de decisiones. En su expresión más pura, si bien no hay tal renuncia al proyecto de cambio social y de construcción de poder, la priorización de la construcción de una nueva sociedad y un nuevo sujeto en el largo plazo, hace que el poder en su dimensión más específicamente política, en términos weberianos, el Estado, sea relegado por los proyectos sociales y educativos orientados hacia la vida cotidiana de los sujetos.

La idea de un nuevo sujeto político se plantea en cada movimiento, en algunos casos de manera explícita y en otros tácitamente. La politización supone un sujeto activo responsable de la redefinición de su lugar en la sociedad y de su

propio devenir, que pugna por ampliar el ámbito político institucionalizado cuestionando las fronteras instituidas de la política, de lo social, de lo económico.

5. El horizonte de posibilidades de los proyectos.

Más allá de las metas formuladas por los movimientos sociales, el rasgo que comparten es su carácter de respuesta a la crisis. Los movimientos de desocupados y el de los trabajadores de empresas recuperadas constituyen respuestas a la crisis económica y al desempleo masivo; el movimiento de asambleas barriales surgió en el seno de una profunda crisis política. Pero la situación actual, fines de 2003, muestra un giro notable de las tendencias del ciclo económico que lo sitúan en una fase claramente ascendente y que contrastan con las condiciones negativas que prevalecieron en la segunda mitad de los '90 y hasta abril de 2002. Lo mismo puede decirse de la situación política que muestra una recomposición parcial del sistema político, sobre todo a partir de la asunción del nuevo gobierno surgido de las elecciones nacionales recientes.

La economía argentina registra una recuperación continuada en el último año y medio, y los pronósticos son coincidentes en augurar una prolongación de esta tendencia durante el próximo año, 2004. Este pronóstico se basa en las condiciones macroeconómicas internas, cuyo equilibrio fue alcanzado por medio de una gestión eficaz de las políticas económicas, y externas, a partir de los acuerdos alcanzados con los organismos multilaterales de crédito, en particular con el FMI, que ofrecen una base para la renegociación de la deuda con los acreedores externos. Este clima de bonanza económica y de pronósticos favorables para el corto y mediano plazo, no se registraba en Argentina desde hace más de 10 años.

Pese al cambio notable de las expectativas económicas, la herencia social dejada por la apertura externa, las reformas de mercado y las políticas neoliberales de los '90, no pueden ser más devastadoras: más de la mitad de la población sumida por debajo de la línea de pobreza, y una elevada tasa de desempleo. Esta combinación contrasta con la experiencia histórica de un país rico en el cual prevalecía, hasta mediados de los '70, un ideal de progreso económico indefinido. Este contraste genera poderosos condicionamientos para las expectativas sociales centradas en la desigualdad de la distribución del ingreso, en un contexto en que pese a las expectativas económicas favorables, la mayoría de los diagnósticos coinciden en las dificultades objetivas para mejorar en el corto plazo la distribución del ingreso, mitigar la pobreza y reducir drásticamente el desempleo. Los que varían son más bien los pronósticos que difieren según la escala de tiempo requerida para superar estos problemas pero que, cualquiera de ellos, no fija plazos inferiores a una década en el mejor de los casos y bajo el supuesto de un crecimiento económico continuo –situación esta última que la economía argentina no registra desde hace tres décadas, entre 1963 y 1974, último ciclo prolongado de bonanza productiva.

En relación con la crisis política, pese a su profundidad el sistema de partidos logró recomponerse parcialmente y actualmente el gobierno nacional aparece fuertemente legitimado por la población. La base de esta legitimidad social combinó la recurrencia a formaciones políticas tradicionales, como el Partido Justicialista, y un conjunto de medidas gubernamentales alineadas con las demandas de cambio de la sociedad. Entre estas medidas cabe citar la renuncia y remoción de varios jueces de la Corte Suprema de Justicia, la derogación de las leyes que suspendieron los juicios contra los militares de la dictadura de 1976-1983, la reversión del foco de la política de seguridad sobre los aparatos

policiales corruptos, la gestión eficaz de la política económica que posibilita una recomposición lenta pero continua de la demanda y el consumo internos, la aplicación de un programa de subsidios masivos para proveer medios de subsistencia a los pobres. Sin embargo, resulta difícil pronosticar la continuidad de este favorable clima político, sobre todo porque la composición parlamentaria actual sitúa a las autoridades gubernamentales en minoría dentro del propio partido que las sostiene, y donde prevalecen fuerzas susceptibles de presión y cooptación por parte de la derecha económica y política, sostenedoras del modelo neoliberal prevaleciente en los '90. Es decir, la legitimidad social alcanzada por el gobierno actual a través de sus políticas, no se sostiene sobre una mayoría parlamentaria sino que ésta, por el contrario y con frecuencia, más bien las cuestiona o puede llegar a cuestionarlas. Esto otorga una gran fluidez al sistema político y resulta difícil pronosticar que la estabilidad actual, producto de la capacidad gubernamental para gestionar la salida de la crisis, perdurará por mucho tiempo.

Este nuevo contexto económico y político condiciona los proyectos de los movimientos sociales, favorece algunos y bloquea otros, configurando un horizonte complejo de posibilidades que procuraremos describir sintéticamente con el fin de comprender mejor el desempeño de los movimientos en relación con las metas que se formulan. Este horizonte surge claramente a través de los debates y conflictos presentes en Argentina hoy, que colocan en primer plano la desigualdad social y la renovación del sistema político.

La meta original y común de las organizaciones de desocupados y de los trabajadores de empresas recuperadas fue la de acceder a medios de subsistencia para sus miembros. Esta meta no es sólo económica sino también política, en el

sentido que más allá de la demanda de medios de subsistencia la lucha de estos actores fue emprendida en pos de su reconocimiento social y político y en nombre del derecho al trabajo, que tiene rango constitucional. Estas luchas se inscriben en continuidad con las de los movimientos que promueven la ampliación de la democracia y del espacio de los derechos, pero además de este componente que podríamos denominar “institucionalista”, también se trata de una meta política en un sentido más radical. Estas acciones también apuntan a la modificación de las reglas básicas de funcionamiento de la sociedad argentina como sociedad capitalista: de la regla que define la inserción social a través del trabajo para acceder a los medios de subsistencia, y de la regla que establece el control por parte de una minoría social del acceso a los medios de producción⁸. Los conflictos en torno a la primera de esas reglas compromete sobre todo la acción de las organizaciones de desocupados, mientras que la segunda es colocada en el foco de acción de los trabajadores de empresas recuperadas.

El horizonte de los movimientos de desocupados

La situación actual es más compleja que la que afrontaron los movimientos de desocupados en sus orígenes. Por un lado se acrecentó considerablemente su base de reclutamiento, ya que los desocupados suman hoy varios millones de personas más que en 1996/97, lo cual supone una ampliación objetiva de su espacio de acción. Por otro lado, existe una diferencia crucial de las políticas gubernamentales actuales con las aplicadas en la época de emergencia del movimiento: mientras que actualmente se asignan subsidios masivos de manera

⁸ Esta distinción, proveniente de Marx, es analizada en extenso por Erik Olin Wright (2003) y orientó los trabajos realizados en el marco del programa que él coordina desde inicios de la década del '90, dedicado a *Real Utopias*.

regular y permanente, los subsidios de la segunda mitad de los '90 eran puntuales, ya que cubrían una proporción mucho menor de desocupados, y esencialmente transitorios. Fue precisamente el carácter puntual y transitorio de los subsidios el que favoreció la organización de los desocupados y su práctica de reclamo mediante piquetes: permitió la canalización selectiva de subsidios focalizados hacia los grupos organizados que reclamaban, en tanto que por su carácter transitorio (limitado a 3 ó 6 meses) estimulaba la movilización periódica de los desocupados. Sin embargo, pese al carácter masivo y regular de los subsidios actuales, no tienen carácter universal sino que se orientan a los desocupados jefes y jefas de hogar, y dejan de lado a los desocupados que no acreditan esta condición. Es por esto posiblemente que en la composición de muchos piquetes se registren muchos jóvenes que, como han señalado algunos analistas de estos movimientos, no son alcanzados, o lo son en menor medida, por la política de subsidios.

La descripción esbozada muestra un cuadro complejo en el que al mismo tiempo que se registran actualmente mejores condiciones económicas que tienden a disminuir o, al menos, acotar el desempleo, y que los subsidios por desempleo se masificaron y regularizaron, sin embargo éstos no cubren a todos los desocupados actuales. Además, la escala de los movimientos de desocupados es reducida en comparación con la magnitud del desempleo, ya que la capacidad de movilización de las organizaciones piqueteras no supera actualmente a 100 mil personas (posiblemente más, si se aceptan las estimaciones oficiales que cifran en el doble de esa cantidad los subsidios canalizados actualmente por esas organizaciones), mientras que la cantidad de desocupados sin subsidio alcanzó,

en octubre de 2003, a unas 2 millones de personas⁹. Esto implica una base considerable de reclutamiento y movilización para las organizaciones piqueteras, pese a la mejoría de las condiciones económicas generales.

En suma, pese al cambio registrado en las condiciones del contexto, subsisten condiciones “objetivas” para la reproducción de las organizaciones de desocupados en los mismos términos que le dieron origen: la posibilidad de ampliación del movimiento a través del reclamo y la movilización para acceder a subsidios, esto es, a medios de subsistencia. El significado de “reproducir las condiciones que originaron el movimiento” puede ser interpretado en términos de la estrategia de “grupo en fusión”, que busca recrear de modo permanente la identidad de origen¹⁰.

Pero la estrategia de “grupo en fusión” encarada por algunas organizaciones de desocupados, es sólo una entre otras. Por un lado, varias organizaciones de desocupados encaran emprendimientos productivos autogestionados, como una práctica destinada a superar su dependencia de los subsidios. Por otro lado, diversos actores políticos con representación parlamentaria y una organización sindical como la CTA –Central de Trabajadores Argentinos- promueven políticas de redistribución de ingresos. Algunas de estas políticas se orientan al aumento en el monto de los subsidios actuales y a la ampliación de sus destinatarios, como la propuesta de la CTA de un seguro de empleo-formación para los desocupados jefes de hogar con un monto sustancialmente superior al de los subsidios

⁹ Esta cifra es difícil de precisar por las variaciones introducidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la metodología de registro de las encuestas de hogares utilizadas para estimar el desempleo, pero en caso que la cifra sea algo menor (aunque también puede ser superior), no invalida el argumento aquí esbozado.

actuales, y subsidios complementarios que universalicen el salario familiar –en especial ingresos por hijos en edad escolar. No cabe duda que una propuesta de este tipo, de implementarse, supone un piso diferente, más elevado, para la demanda salarial de los sindicatos.

Otras propuestas giran en torno a un ingreso básico ciudadano universal, que garantice el acceso a los medios de subsistencia para todos. Esta política involucra un cambio radical en una de las reglas básicas de la sociedad, ya que supone sustituir la regla que define la inserción social a través del trabajo, por una regla de acceso universal a los medios de subsistencia¹¹. Aunque se ha discutido la oportunidad, la posibilidad objetiva, la dificultad de instrumentación y los alcances redistributivos (que se irían atenuando con el crecimiento económico) de esta reforma, frente a la que se han levantado numerosas objeciones, no cabe duda que su implementación implicaría una reformulación de todo el sistema de seguridad social y de las políticas sociales. Asimismo, promovería un cambio en las orientaciones de los actores tanto sindicales, ya que también subiría el piso para la negociación salarial, como para las organizaciones de desocupados ya que suprimirían un factor central de su movilización.

Estas diferentes estrategias formuladas para garantizar el acceso a los medios de subsistencia, indican hasta qué punto se ha ampliado el espacio de proyectos políticos para las organizaciones de desocupados, en qué medida su presencia estimula el debate sobre la redistribución de ingresos, y en qué medida se han

¹⁰ La noción de “grupo en fusión” fue desarrollada por J.P. Sartre en su *Crítica de la Razón Dialéctica*. Una intervención reciente de Emilio de Ipola (2003) nos aportó esta referencia.

¹¹ Esta propuesta se inspira en la formulación de algunos filósofos políticos europeos, como Philippe Van Parijs, a mediados de los '80, y fue retomada en Argentina por algunos

ampliado también sus posibilidades de establecer alianzas políticas con otros actores.

El horizonte de los trabajadores de las empresas recuperadas.

Algunos de los proyectos surgidos en el movimiento de trabajadores de empresas recuperadas siguen en parte los lineamientos expuestos, pero abren un espacio de debate diferente. Ante el nuevo contexto de crecimiento económico, la estrategia de “grupo en fusión” que busca recrear las condiciones originales de emergencia del movimiento, encuentra limitaciones. La recuperación de empresas fue una práctica adecuada en el seno de la crisis económica, que multiplicaba la deserción de los empresarios de sus establecimientos, pero en un ciclo de bonanza económica como el actual esa deserción se atenúa porque disminuyen los quebrantos. Obviamente, aún en la fase ascendente del ciclo económico, los quebrantos siguen registrándose y, por otro lado, también puede aplicarse una lógica en términos de escala: como la cantidad de empresas recuperadas por sus trabajadores es reducida –ya que no ascienden a más de 150 establecimientos en todo el país-, sigue existiendo un campo objetivo para seguir ampliando el movimiento por medio de la recuperación de nuevas empresas.

Sin embargo, la mejora económica estimula la formulación de estrategias diferentes enfocadas sobre el crecimiento de las empresas ya recuperadas, a favor del mejoramiento de las condiciones de mercado en diferentes actividades, o bien de estrategias que buscan capitalizar e institucionalizar los logros del movimiento. La estrategia centrada en el crecimiento de las empresas ya

investigadores e incorporada a la propuesta del ARI –Alianza para una República de Iguales- en las últimas elecciones nacionales.

recuperadas encuentra un clima favorable no sólo en términos de la coyuntura económica, sino también en el ámbito político partidario, que ha ampliado la red de alianzas del movimiento, y también en el Estado donde diversas agencias ofrecen apoyos y recursos de distinto orden, financieros, de formación y asistencia técnica, etc. En un contexto de crecimiento económico, los trabajadores enfrentan nuevos desafíos en la gestión de las empresas recuperadas, diferentes a los que afrontaron inicialmente vinculados con su mera subsistencia y preservación del puesto de trabajo.

Por otro lado, y a través de los miembros del movimiento que accedieron a cargos parlamentarios –locales y nacionales- en las últimas elecciones, la experiencia adquirida puede ser capitalizada a través de propuestas de renovación institucional y jurídica. Entre éstas se destaca la propuesta de reforma de la ley de quiebras, con el fin de garantizar la continuidad de la producción de empresas en riesgo y el acceso de los trabajadores a los medios de producción.

Aunque la motivación inicial para la recuperación de empresas fue la de sostener el acceso a medios de subsistencia, mediante la conservación del puesto de trabajo en un contexto de desocupación masiva, la práctica de los trabajadores los llevó mucho más allá. El acceso a los medios de producción por parte de los trabajadores constituye un verdadero “escándalo” cultural precisamente porque apunta a modificar la otra regla de funcionamiento del sistema capitalista. Posiblemente sea esto lo que suscita una enorme expectativa social sobre un movimiento reducido en efectivos y que se extiende a poco más de un centenar de empresas.

El modelo cultural propuesto por estos trabajadores para el acceso a los medios de producción, difiere del modelo prevaleciente que privilegia al empresario capitalista individual. Este modelo impregnó diversas propuestas para el desarrollo de “micro-empresas”, incorporadas en programas sociales promovidos por los organismos multilaterales de crédito durante los '90. Estos programas buscaron ofrecer mecanismos compensatorios para los problemas, supuestamente transitorios, provocados por la “modernización” y las denominadas reformas de mercado, facilitando el acceso a medios de subsistencia para la población afectada por el desempleo y la pobreza. La pequeña escala de los emprendimientos encarados por esos programas y sus contenidos de política social compensatoria, terminaron configurando su carácter de “programas para pobres”, en el que el molde “empresarialista” aparecía como excesivo para actividades destinadas a la pura subsistencia de quienes las encaraban, que dudosamente y con muchas dificultades podrían alcanzar, algún día, el rango de “empresas”.

El acceso a los medios de producción orienta, casi “naturalmente”, el establecimiento de redes de alianzas del movimiento con los otros actores colectivos que accedieron a la propiedad social, en particular con el movimiento cooperativo. Pero esta alianza encuentra dificultades que residen en el marco jurídico institucional que regula tradicionalmente a las cooperativas, que las sujeta a la auditoría estatal a través de una agencia específica, el INAES. Éste genera en ocasiones un bloqueo político a la formación de nuevas cooperativas de trabajo, la forma institucional a la que han apelado con mayor frecuencia los trabajadores de empresas recuperadas para constituirse como sujetos jurídicos. Pero esto tiene un carácter meramente instrumental para acceder a la posesión de los medios de producción, es decir, no ha sido el ideal del cooperativismo el que

los condujo hasta allí e, incluso, los trabajadores de empresas recuperadas afrontan dificultades para adecuar sus modalidades de organización – asambleístas, participativas e igualitarias, en su mayoría-, a la estructura formal estatutaria de las cooperativas que impone pautas de funcionamiento más rígidas y jerárquicas.

En suma, el modelo cultural de acceso a los medios de producción propuesto por los trabajadores de empresas recuperadas difiere de los prevalecientes en el seno de la economía social, tanto del molde individualista de los programas asistenciales para “micro emprendedores” como del molde asociativo de las antiguas cooperativas¹².

El horizonte de las asambleas barriales.

La recomposición parcial del actual sistema de partidos que posibilitó la salida electoral reciente no garantiza un horizonte político estable. La reactivación –en diciembre de 2003- del juicio a ex senadores involucrados en sobornos para la aprobación de la reforma laboral de 2000, augura una profundización de la crisis de los grandes partidos, el gobernante PJ y la UCR. La confirmación de la existencia de un esquema de corrupción en el Senado nacional, viene a legitimar retrospectivamente el reclamo de las asambleas barriales para “que se vayan todos”. Pero, como se señaló anteriormente, el gobierno actual extrae buena parte de su legitimidad de una orientación decidida en el rumbo señalado

¹² “En efecto, contra el prejuicio generalizado de que la sociedad civil es un conjunto homogéneo de actores sociales, la realidad demuestra que se trata de una compleja y contradictoria gama de actores heterogéneos en los planos social, cultural y político; que los espacios en que se mueven y los agentes con que interactúan son igualmente diversos, y que los

originalmente por las asambleas. Es decir el cambio de contexto es decisivo e impone una redefinición de las metas de las asambleas. Difícilmente esa redefinición involucre una participación directa en el sistema de partidos, ya que eso involucra pérdida de autonomía, un valor central del movimiento, y en el límite su desaparición. Ante una situación como la actual, en la que la acción de gobierno también se “despega” de la acción partidaria, uno de los riesgos latentes reside en la posibilidad de recaer en la tradición populista que vincula directamente al gobernante con su “pueblo”, y que desemboca en una suerte de neocorporativismo (Peruzzotti, 2002).

Más bien el rol de las asambleas sólo podría ser el del escrutinio permanente del sistema por medio del cuestionamiento del monopolio partidario y de las fronteras que éste establece sobre la política. Y éste es, de hecho, el rol que se han asignado las asambleas tanto a través de movilizaciones orientadas sobre las grandes cuestiones nacionales, como en sus acciones sobre el espacio local. Es en este terreno en el que las asambleas encuentran, casi “naturalmente” a los otros movimientos sociales, tanto los surgidos recientemente, -piqueteros y trabajadores de empresas recuperadas-, como los de mayor tradición -el movimiento de derechos humanos y diversos movimientos culturales.

En relación con el sistema político el movimiento de asambleas barriales aparece como un espacio social de deliberación, activismo y crítica. En relación con el Estado, especialmente en el plano local, interpela de modo permanente a los funcionarios sobre sus responsabilidades y acciones, y también participa

intereses materiales y simbólicos que ponen en juego no pueden asimilarse a un solo patrón interpretativo”. Olvera, Alberto. 2003. Pág. 3.

críticamente en las deliberaciones sobre presupuesto participativo¹³ y Ley de Comunas en la Capital Federal. En relación con los movimientos piqueteros y trabajadores de empresas recuperadas, apoya solidariamente sus acciones y al mismo tiempo articula emprendimientos conjuntos en el seno de la economía social.

En cualquiera de estas interlocuciones hacia la política y la sociedad, la autonomía radical de las asambleas se destaca como su valor central. Esta es la dificultad que encuentran los militantes partidarios que siguen participando en las asambleas barriales con los viejos esquemas de integración en un “frente social”: la vocación de “control” u “orientación” sobre estos espacios deliberativos se revela, finalmente, como una pasión inútil.

Pero en cierto sentido también, la autolimitación de las asambleas para integrar el sistema político y el Estado indica los límites de la politización de la sociedad civil. Ésta sólo puede sostenerse en un proyecto inacabado, una utopía, de transformación permanente de la sociedad y de la cultura.

¹³ Para un análisis y reflexión teórica basada en la experiencia de presupuesto participativo en Porto Alegre, que inspiró la aún muy limitada experiencia en curso en la Ciudad de Buenos Aires, ver Avritzer (2002).

BIBLIOGRAFÍA

Avritzer, Leonardo. *Orcamento participativo e a teoria democratica: um balanço crítico*. Universidad Federal de Minas Gerais. Departamento de Ciencia Política. Projeto Democracia Participativa. Belo Horizonte. 2002.

Badiou, Alain. *Movimiento social y representación política*. Conferencia en el marco del tercer ciclo anual del Encuentro Permanente por un Nuevo Pensamiento. Buenos Aires. 24 y 25 de abril de 2000.

De Ipola, Emilio. *Política y Sociedad: ¿escisión o convergencia?* Ponencia presentada en el Seminario sobre Movimientos sociales emergentes, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín. Buenos Aires. 20 de abril de 2003.

Di Marco, G., Palomino, H., Altamirano, R., Méndez, S. y Libchaber, M. *Los Movimientos sociales en Argentina. Asambleas: la politización de la sociedad civil*. Ed. Jorge Baudino. Buenos Aires. 2003.

Jelin, Elizabeth. *Los nuevos movimientos sociales/ 1: Mujeres*, Rock Nacional. Ed. CEAL. Buenos Aires. 1985.

Laclau, E., Mouffe, Ch. *Hegemonía y democracia radical*, en *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*. Ed. Siglo XXI. Madrid. 1987.

O'Donnell, G. *Estado, democratización y ciudadanía*, en *Revista Nueva Sociedad* N°128. Caracas. Diciembre 1993.

Olvera, Alberto. *Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios públicos y democratización: los contornos de un proyecto*. Ponencia presentada en la IV Conferencia Regional ISTR- LAC en San José, Costa Rica. 8-10 de octubre de 2003.

Panfichi, Aldo (coordinador), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur*. Ed. FCE. México. 2002.

Héctor Palomino, Gustavo Rajher, Leticia Pogliaghi, Inés Lascano

Peruzzotti, Enrique. *Emergencia, desarrollo, crisis y reconstrucción de la sociedad civil argentina*. En Aldo Panfichi (coordinador), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur*. *Ibid.*

Palomino, H. y Pastrana, E. *Los nuevos movimientos sociales en Argentina*. En F. Calderón (comp.): *¿Es sostenible la globalización en América Latina?. Debates con Manuel Castells*. Ed. Fondo de Cultura Económica. Santiago de Chile. 2003.

Palomino, H. (coord.). *El movimiento de empresas recuperadas*. En colaboración con la Cátedra de Relaciones de Trabajo. - Revista Sociedad N° 20/21 Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires- 2003. Publicado en inglés como *The worker's movement in occupied enterprises: a survey*. En *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, Vol. 28 N° 55-56 (2003): 71-96.

Palomino, H. *Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. Entre la informalidad y la economía social*. En Revista Nueva Sociedad N° 184. Caracas, Venezuela, 2003.

Sartre, J. P. *Crítica de la Razón Dialéctica /Volumen I*. Ed. Losada. Buenos Aires. 1965.

Svampa, M. y Pereyra, S. *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. E. Biblos. Buenos Aires. 2003.

Wilkis, Ariel y Vommaro, Gabriel. *De la crisis política a la acción: el sentido de lo político en las movilizaciones populares recientes*". En Battistini, Osvaldo (coord.), *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*. CEIL-PIETTE, Asociación Trabajo y Sociedad. Buenos Aires. 2002.

Wright, E. O. *Real Utopias*. Home Page: <http://www.ssc.wisc.edu/~wright/> 2003.